

ARGENTINA EN SU BICENTENARIO: UN CAMINO ACCIDENTADO EN LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO NACIONAL Y DEL ESCENARIO POLÍTICO

INTRODUCCIÓN

A dos siglos del comienzo del proceso independentista de Argentina, distintos enfoques historiográficos han intentado explicar las dificultades del sistema democrático argentino. Algunos lo han abordado desde el poder del sector militar que, de ser instrumento de la oligarquía en 1930, ha pasado a controlar, décadas después, los gobiernos populares, hasta intervenir abiertamente. Otros, han identificado los problemas de gobernabilidad, a partir de la fuerte incidencia de líderes populares como Hipólito Irigoyen y Juan Domingo Perón quienes, a partir de prácticas clientelares del tipo de patronazgo, se sirvieron de las mismas para acumular poder.¹

El presente trabajo se propone realizar una mirada de largo plazo, la cual va articulando distintos procesos y problemáticas. Desde el comienzo un Estado se va construyendo y co-constituyendo con distintas clases sociales. Sin embargo el propio devenir de los acontecimientos nos muestra una suerte de metamorfosis permanente, ya que el mismo resultó cautivo por las distintas clases sociales, las cuales—ya sea para su captura como para su control—debieron acudir al ejercicio de la violencia, transformando a los opositores en enemigos.

De ese modo nos proponemos indagar acerca de los límites del sistema político argentino planteando los problemas que ha tenido la clase dirigente para formular un modelo que, consensuado con las distintas clases sociales, permita un funcionamiento y cuyas contradicciones no conlleven a la eliminación del enemigo. Lo expuesto servirá para identificar, a lo largo de la historia política argentina, distintos momentos diferenciados. No obstante, sostenemos que desde la Revolución de Mayo de 1810 es posible identificar un hilo conductor inherente a la gobernabilidad como son las prácticas clientelares, las que al mismo tiempo suponen el ejercicio de la violencia política.

¹ David Rock, *El radicalismo argentino 1890–1930*, Amorrortu, Buenos Aires 1977.

Por otra parte, a partir del siglo XX, la exacerbación de la violencia condujo a que el ejército pasara a constituirse en el elemento indispensable para la gobernabilidad, ya que los partidos políticos contaron con este instrumento de un modo cada vez más asiduo, llegando a ser desde la década de 1930 un actor inevitable en el sistema político argentino.

Finalmente a partir de 1983, en términos generales, la democracia desplazó a las fuerzas armadas del tablero, permitiendo que el juego corporativo-democrático se situara en el centro de la escena.

Si bien podemos así destacar un planteo interpretativo, el mismo no obviará la identificación de los principales acontecimientos del período, así como tampoco el uso de fuentes primarias que sostienen las afirmaciones vertidas. En el análisis realizado hemos utilizado los aportes realizados por nuestra historiografía.

Los pasos previos a la independencia

Los orígenes de la Nación Argentina deben buscarse en cuatro hechos significativos.

El primero fue la independencia de las colonias británicas de América del Norte, en 1776, que dieron nacimiento a los Estados Unidos.

El segundo, que podríamos definir de “alcance global” para la época, fue la Revolución Francesa de 1789 que introdujo profundas transformaciones políticas, económicas y culturales.

El tercero tiene una incidencia local, si bien obedece a las intenciones de uno de los imperios de la época: el Reino Unido. La pequeña aldea de Buenos Aires, sede del gobierno del entonces Virreinato del Río de la Plata, fue el objetivo de dos invasiones de fuerzas británicas en 1806 y 1807, ambas repelidas por la decidida acción de los habitantes de la ciudad, quienes se organizaron dando inicio a las primeras milicias, origen del posterior Ejército Argentino.

El cuarto fue la expansión del imperio napoleónico y la ocupación de España, cuya monarquía se opuso firmemente a los revolucionarios desde 1789 a 1796. España se alió con el imperio británico pero, en 1793, fue invadida por los ejércitos revolucionarios franceses y forzada a negociar.²

En 1796 el gobierno de España se encontraba en manos de Manuel Godoy, quien resolvió alinearse del lado de Francia. En el plano militar, la decisión fue nefasta y afectó comercialmente a Buenos Aires, en tanto que obstaculizó el envío de sus productos a la metrópoli a causa del bloqueo británico. A raíz

² Otros autores como John Lynch han vinculado este proceso con un sentimiento antiespañol forjado a partir de las reformas borbónicas. En 1795 España firmó la paz con Francia, a la que le cedió Santo Domingo. Como contrapartida, los franceses se retiraron de Cataluña, Navarra y el Rosellón.

de esta situación, el gobierno español autorizó el intercambio comercial con los neutrales, medida que dividió a los comerciantes de Buenos Aires: por un lado, estaban los que deseaban obtener beneficios de esta apertura y, por el otro, los conservadores, quienes aspiraban a mantenerse dentro del sistema monopólico español.

En mayo de 1803 Francia e Inglaterra reanudaron la guerra. En 1805, Rusia, Austria y Suecia se aliaron a Londres y España se halló en medio del conflicto. Mientras Napoleón dirigió sus ejércitos hacia el este de Europa, los británicos destruyeron las flotas española y francesa en la batalla de Trafalgar. España se encontró imposibilitada de defender su vasto imperio y sus colonias se tornaron vulnerables. Ante esta situación, el Reino Unido envió una flota y tropas del ejército al extremo sur del continente africano a los efectos de imponer su autoridad en la Ciudad del Cabo, la República de Batavia, en manos de los holandeses, a la sazón, aliados de la Francia napoleónica. Una vez dominada la región, los británicos precisaron de suministros, pero como escaseaban, el comodoro Sir Home Popham –comandante de las unidades navales– decidió enviar una expedición al otro lado del Atlántico, a las colonias españolas de América del Sur. Popham convenció al comandante de las tropas de Ciudad del Cabo a despachar una fuerza de un millar de hombres integrada por el 71º Regimiento de Infantería y algunos efectivos de artillería, a los que se sumaron otros novecientos hombres de la marina –artilleros e infantes– cuando la fuerza expedicionaria recaló en Santa Elena.

El 8 de junio de 1806 esta fuerza expedicionaria ingresó al Río de la Plata y el 25 del mismo mes, los británicos desembarcaron en la localidad ribereña de Quilmes, a unos 20 kilómetros al sur de Buenos Aires. Popham se adueñó fácilmente de la ciudad virreinal pero en seis semanas los británicos cayeron prisioneros de las fuerzas de Buenos Aires en la Reconquista del 12 de agosto de 1806.³

En 1807 los británicos emprendieron una segunda invasión a Buenos Aires que tampoco logró su objetivo pero que desembocó en un hecho significativo: el 10 de febrero de 1807, un Cabildo Abierto de los ciudadanos de Buenos Aires tomó la decisión de deponer al virrey, el Marqués de Sobremonte, y dispuso que el francés Santiago de Liniers quedase a cargo de todas las fuerzas de la defensa. El 19 de febrero la institución de la Audiencia asumió el gobierno provisorio del virreinato.

³ El comodoro Popham era amigo del militar y revolucionario Francisco de Miranda, quien se consagró a obtener la independencia de las colonias españolas con el apoyo de la corona británica. En 1789 le presentó sus proyectos al Primer Ministro William Pitt. El 12 de octubre de 1804 Pitt invitó a cenar a Popham a la quinta del Vizconde Melville, Henry Dundas, Primer Lord del Almirantazgo británico, oportunidad en la que se le encargó redactar un memorándum sobre las colonias españolas de América del Sur. Miranda contribuyó en su redacción.

Hacia la gesta de 1810

El fracaso de los británicos se debió a un error de cálculo pues consideraron que la población de Buenos Aires los recibiría como quienes la liberarían del yugo español. Sin embargo, lejos de la emancipación, los británicos les exigieron a los pobladores de Buenos Aires un juramento de fidelidad al Rey Jorge III. Tampoco les dieron claras señales a aquellos que desearan colaborar de cuál sería su situación en caso de que la colonia fuera devuelta a España.

La resistencia de los ciudadanos de Buenos Aires y su activa participación en su defensa y reconquista cambió la visión, con respecto de la metrópoli, de los líderes criollos que encabezaron la lucha contra la ocupación británica, así como también la visión que tenían de sí mismos. Por otro lado, el gobierno español demostró su incapacidad para defender a sus súbditos en el Virreinato del Río de la Plata.

Las invasiones inglesas se constituyeron en uno de los catalizadores de la causa emancipadora, tanto de lo que luego sería la República Argentina como de otras regiones de Hispanoamérica. La necesidad de defender la ciudad requirió de una organización ciudadana y de la formación de milicias que, lejos de ser desmovilizadas, se erigirían en el brazo armado de la revolución en el Cono Sur de América. Esa incipiente militarización pudo estructurar las condiciones que permitieron generar un sentimiento antiespañol, a la vez de potenciar un sentimiento americano que se plasmó en el proceso revolucionario de 1810. El Cabildo Abierto de 1807, en momentos de la segunda invasión inglesa, fue un antecedente relevante para el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 que decidió dar por concluidas las funciones del virrey Baltasar Cisneros el día 25.

Una gobernabilidad sin constitución

El proceso iniciado en mayo de 1810 fue liderado por un sector de abogados nutridos de los ideales revolucionarios en boga, apoyados por comerciantes criollos y clérigos locales, con el brazo de una milicia gestada al calor del rechazo de los invasores ingleses y aprovechando la acefalia de los reyes españoles, víctimas del expansionismo de Napoleón. Cabe destacar que esos líderes revolucionarios estaban fuertemente imbuidos de los ideales de la masonería que también estuvieron presentes en la independencia de los Estados Unidos de 1776 y en la Revolución Francesa de 1789. Esta última, precisamente, se caracterizó por tomar los principios masones de *libertad, igualdad y fraternidad*. Aún más, los miembros de la Primera Junta de Gobierno—el Primer Gobierno Patrio considerado como — fueron mayoritariamente masones: el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, los secretarios Mariano Moreno y Juan José

Paso, los vocales Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel Alberti, Juan Larrea y Domingo Matheu.⁴ Sólo Miguel de Azcuénaga no fue miembro de la masonería.⁵

El nuevo grupo dirigente era heterogéneo y tenía distintos proyectos políticos que abarcaban desde un centralismo jacobino hasta un conservadurismo militar. Esas divergencias dieron lugar a una serie de gobiernos provisorios e impidieron no solamente el establecimiento de un gobierno estable, sino también que naufragaran las constituciones centralistas de 1819 y 1826.

Desde 1810 se produjo una sucesión de gobiernos patrios que, a partir de 1816, tras la declaración de la independencia en el Congreso de Tucumán, se enmarcaban en una serie de luchas encarnizadas que se extendieron hasta 1853 y que respondían a las disputas de poder entre los diversos caudillos provinciales.

Luego de la declaración de la independencia en 1816 y del éxito de la campaña militar en Chile, en 1818, se procuraba consolidar la unidad del país pero no se logró un acuerdo en torno a la organización económica e institucional. El rechazo a la Constitución de 1819 y la batalla de Cepeda del 1º de febrero de 1829 –en la que las fuerzas nacionales fueron derrotadas por las de los caudillos de las provincias del Litoral– ocasionaron la caída del Directorio, el primer Poder Ejecutivo unipersonal creado en 1814, y por lo tanto la disgregación del poder central. Esta situación consolidó el poder de las provincias y convirtió a la provincia de Buenos Aires en una más de las que integraban el país.⁶

Cada caudillo provincial estaba fuertemente vinculado a los intereses y a la producción de sus respectivas provincias, haciendo inconciliable llegar a un programa común de gobierno. Los distintos proyectos no eran compatibles: por una parte la competencia del litoral con la producción estanciera de la provincia de Buenos Aires, por otra, el resto de las provincias del norte – con su producción textil– requería de un proteccionismo aduanero. Al mismo tiempo, la actividad comercial de Buenos Aires se fue subordinando a los comerciantes ingleses y este “nuevo pacto colonial” provocó la expansión de la campaña bonaerense, por lo cual la siguiente generación dio origen a un desarrollo productivo de la actividad agropecuaria, especialmente la ganadería vacuna.

De ese modo, la transformación productiva dio paso a un nuevo escenario social y político y quien representó a estos nuevos intereses y se transformó, ya no en el líder de la ciudad, sino en el hombre de la provincia que supo subordinar y/o aliarse con el resto de las oligarquías provinciales fue Juan Manuel de Rosas, quien detentó el poder del país hasta 1852. Ya que desde la década

⁴ Víctor Silvestre, Jorge Rodríguez Rossi, *La Masonería y el bicentenario*, Lajouane, Buenos Aires 2010, pág. 14.

⁵ *Ibid.*

⁶ Tulio Halperín Donghi, *De la revolución de independencia a la confederación rosista*, Paidós, Buenos Aires 1980, pág. 130.

de 1820 encarnó los intereses de los estancieros locales, les proveyó de tierras en su campaña “al desierto”⁷, resolvió el problema de los aborígenes mediante los pactos con los indios amigos y, como si esto fuera poco, la “papeleta de conchabo” (comprobante de trabajo)⁸ ligó la mano de obra gaucha a las estancias locales. Todo ello se lograba a través de la suma del poder público y de las facultades extraordinarias. Además, la suspensión de la leva le permitió lograr cierta legitimidad en los sectores subalternos.⁹ De este modo, estructuró la gobernabilidad de la provincia que se constituyó en la mayor productora del país.

Para ello, Rosas –quien se erigió como máximo líder del federalismo– hizo uso de un aparato fuertemente represivo, por el cual “La Mazorca” se constituyó en su brazo armado, necesario para cumplir con este propósito. Ya desde los comienzos de la gobernación, la realización de pactos, primero con las provincias del litoral y luego con las del “interior” le permitieron armar una red en donde el control de los recursos aduaneros alimentó un sistema de premios y castigos a las provincias, que terminaron siendo tuteladas. Surgió así en 1831 la Confederación Argentina, logrando amalgamar el sentimiento provincial, imperante en las distintas provincias. Rosas encarnó al federalismo frente al proyecto centralista, representado por la Liga Unitaria.

No obstante, la estabilidad lograda no fue eterna a pesar de que, a costa de coerción y de subsidios, mantuvo el orden interno y logró resistir, primero, un bloqueo de Francia y, luego, otro de Francia y del Reino Unido en forma conjunta. Más allá de la desaparición física de sus posibles e inmediatos competidores, como el de la provincia de La Rioja, Facundo Quiroga¹⁰, y el de la provincia de Santa Fe, Estanislao López¹¹, quienes aspiraban a cierta constitucionalidad, hacia mediados de siglo se produjo la ruptura con el caudillo de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, quien pudo canalizar una heterogénea alianza contra Rosas con el apoyo de fuerzas de Brasil y de Uruguay. El 3 de febrero de 1852, Urquiza se impuso ante Rosas en la batalla de Caseros. Rosas envió su renuncia a la Legislatura de Buenos Aires y se exilió en Inglaterra con su familia, donde falleció en 1877.

⁷ Los territorios aborígenes ubicados al norte del río Negro.

⁸ En esos años del siglo XIX, la “papeleta de conchabo” era un documento de uso obligatorio para los peones en el campo. A través de ese documento el empleador acreditaba que un determinado peón (gaucho) trabajaba a sus órdenes. Su carencia daba lugar a la detención policial y la aplicación, por parte de los jueces de paz de la campaña, del procedimiento previsto para los vagos, es decir, condena al servicio de las armas o realización de servicios públicos sin sueldo por varios años.

⁹ La “ley de leva” consistía en permitir a la policía de la campaña detener a todo aquel que no estuviera trabajando en alguna estancia como peón y enviarlo a la frontera a luchar contra los indios.

¹⁰ Facundo Quiroga fue asesinado en Barranca Yaco, provincia de Córdoba, el 16 de febrero de 1835.

¹¹ En 1836 Estanislao López enfermó de tuberculosis y murió en Santa Fe el 15 de Junio de 1838. Tenía entonces 52 años.

La oligarquía gobernante, la consolidación de los gobiernos conservadores y el fraude (1852–1916)

El arco opositor que derrocó a Rosas estaba integrado por un heterogéneo grupo conformado por exiliados unitarios y por federales disidentes, tanto de Buenos Aires como de las demás provincias. Tenían solamente una cosa en común y es que todos se sentían victoriosos y con el derecho de imponer su propio proyecto político.

Urquiza procuró organizar el país de forma definitiva bajo una Constitución republicana, representativa y federal. Por su parte, a comienzos de 1853, el gobierno provisional de la provincia de Buenos Aires designó gobernador interino a Vicente López y Planes, quien no pudo enfrentar la sublevación del 11 de septiembre de los elementos porteños que aspiraban a la autonomía provincial. Urquiza percibió rápidamente que la dirigencia de Buenos Aires lo rechazaría como Director Provisorio de la Confederación, encargado de las relaciones exteriores y jefe de los ejércitos. No estaba equivocado pues sus opositores lo consideraban un tirano similar a Rosas. Para enfrentarlo se fueron delineando dos sectores: los que seguían al general Bartolomé Mitre, quienes aspiraban a una unión nacional bajo el predominio de la ciudad de Buenos Aires, y los alineados a Adolfo Alsina o “autonomistas”¹², quienes privilegiaban el aislamiento del resto del país.¹³ Los dirigentes de Buenos Aires no estaban dispuestos a perder el control de su puerto y de la aduana, dos factores que les permitían progresar, pero que, por otro lado, obstaculizaban el desarrollo de las otras provincias. Del mismo modo, no aceptaban la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay.

Urquiza convocó, en la ciudad de Santa Fe, al Congreso General Constituyente donde se sancionaría la Constitución Nacional de 1853 sin la participación de representantes de Buenos Aires. Se reunieron los gobernadores de las 13 provincias que conformaban la Confederación y el 1º de mayo de 1853 se sancionó la Constitución Nacional sin la presencia de Buenos Aires. La Carta Magna respondía a una orientación liberal y se basaba en el libro *Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina*, escrito por Juan Bautista Alberdi, y en la constitución de Estados Unidos. Se tomó como modelo la forma representativa, republicana y federal, con rasgos centralizadores más fuertes que los federales.

Desde ese momento hubo una secesión dentro de un mismo territorio. Por un lado estaba la Confederación y por el otro la provincia de Buenos Aires que dictó su propia constitución y procuró el reconocimiento de Francia, aunque

¹² Valentín Alsina fue uno de los fundadores del Partido Autonomista.

¹³ Por una década hubo un predominio de los sectores cercanos a Valentín Alsina en la gobernación de Buenos Aires.

reconociendo que formaba parte de la Argentina. Ante esta situación se estableció la capital provisional de la Confederación en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. En esa ciudad, en marzo de 1854, asumió el primer presidente constitucional de la Argentina, Justo José de Urquiza.

La secesión privaba a la Confederación de los recursos de la rica provincia de Buenos Aires, situación que en poco tiempo le produjo una asfixia económica. Hacia 1859, a pesar de los Pactos de Convivencia que se establecieron entre las partes, la tensión se incrementó y, en 1859, desembocó en la guerra. La campaña militar fue breve y el presidente Urquiza venció al general Bartolomé Mitre en la batalla de Cepeda y exigió que Adolfo Alsina se apartase de la gobernación de Buenos Aires y la incorporación de esa provincia a la Nación a través del Pacto de Unión de San José de Flores.¹⁴ Sin embargo, no se resolvió un tema crucial como la cuestión de la Capital de la Nación. Un nuevo enfrentamiento armado se produjo en septiembre de 1861 en la batalla de Pavón, en la que no hubo una clara definición de la victoria, ya que Urquiza se retiró del combate, a pesar de que las armas lo estaban favoreciendo militarmente, y se marchó a su palacio de San José, en la provincia de Entre Ríos. Urquiza alegó entonces fatiga moral por el derramamiento de sangre argentina pero aún hoy se discute si gestiones secretas de la masonería inclinaron el resultado a favor del gobernador de Buenos Aires, general Mitre.¹⁵ Como resultado de esa decisión, Mitre salió victorioso del campo de batalla. Luego se produjo una negociación entre Mitre y Urquiza y se consolidó el triunfo de Buenos Aires.

El entonces presidente, Santiago Derqui, quien sucedió a Urquiza e inició su mandato el 5 de marzo de 1860, renunció a su cargo tras la batalla de Pavón, en 1861, y se marchó a Montevideo, alejándose de la política nacional. Ante la acefalia, Mitre –miembro del Partido Liberal– actuó de manera mesurada y convocó a los representantes de todas las provincias a una asamblea a los efectos de elegir nuevas autoridades nacionales y obtener un consenso para establecer los pilares de la unidad nacional. En octubre de 1862 Mitre fue elegido para ejercer la presidencia de la Nación, aunque ello no impidió que se produjeran violentas revueltas en algunas regiones del país.

La reforma de la Constitución, ahora consensuada por las distintas regiones del país, estuvo acompañada por un cumplimiento relativo de la misma, ya que fue habitual el fraude electoral que supuso que, en general, el presidente saliente designara al entrante, lo cual suponía el control de la sucesión.¹⁶ Carlos D'Amico, quien fue gobernador de Buenos Aires entre 1884 y 1887, en su libro

¹⁴ En ese momento la gobernación de Buenos Aires la ejercía Felipe Lavallol, quien convocó a elecciones que le dieron el triunfo a Bartolomé Mitre, asumiendo en mayo de 1860.

¹⁵ Página oficial de la Presidencia de la Nación Argentina: http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1063, consulta: 17 de septiembre de 2010.

¹⁶ Natalio Botana, *El orden conservador*, Buenos Aires 1986.

Buenos Aires, sus hombres, su política (1860–1890) realiza una aguda crítica al sistema político argentino de aquel momento.¹⁷ En el capítulo V, en el apartado titulado “La Constitución nacional y las provincias son una farsa”, destaca que para favorecer esa sucesión era importante el ejercicio de la violencia. Asimismo, señala que el sistema republicano, representativo y federal que se ha adoptado sólo estaba escrito en las Constituciones Nacional y Provinciales ya que, en la práctica, jamás era aplicado.

En realidad, las elecciones populares no existían pero se cubrían todos los requisitos legales para dar la apariencia de que eran llevadas a cabo. Esto ocurría tanto en la capital de la República como en el resto de las provincias desde los tiempos del gobierno de Rosas. La inscripción de los ciudadanos en los registros públicos, que es lo que habilitaba para votar, se hacía poniendo todo empeño para que la inmensa mayoría no se inscriba, sobre todo si esos individuos no estaban comprometidos con los candidatos que el gobierno designaba. Sólo se inscribían aquellos que no era posible impedir que lo hicieran, mientras que los “comprometidos” con el gobierno, los empleados a sueldo, todos los que dependían del mandatario de turno, eran inscritos aunque no fueran a solicitarlo y, además, en cada distrito electoral se agregaba un número igual de hombres supuestos al de todos los inscritos para asegurar el triunfo. Del mismo modo, se recurría a la violencia para desalentar a aquellos ciudadanos que no estaban dispuestos a acompañar la voluntad de las autoridades. A ello debe agregarse que otra práctica política habitual que mostraba las facultades de un poder ejecutivo fuerte, resultaron ser las frecuentes intervenciones provinciales.

La presidencia de Mitre estuvo signada por una serie de contratiempos desde el levantamiento de caudillos del interior —quienes reaccionaron ante el avance del Estado Nacional sobre los intereses locales— hasta la guerra de la Triple Alianza (1865–1870), en la cual Argentina se unió a Brasil y a Uruguay contra Paraguay. Durante la campaña presidencial de 1867 emergió un nuevo actor: las Fuerzas Armadas. El país estaba en guerra y el ejército favoreció la elección del embajador argentino ante el gobierno de Estados Unidos: Domingo Faustino Sarmiento. Así, Sarmiento asumió la presidencia en 1868. La historia lo recuerda como una figura controvertida pero a él se le deben grandes avances en el proceso de organización nacional, en materia de educación y de defensa. Sin embargo, también debió enfrentar las sublevaciones de caudillos del interior y una creciente crisis económica. Como era costumbre, también intentó imponer a su sucesor, su ministro de Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda.

Adolfo Alsina, vicepresidente de Sarmiento y quien le acercó el mayor caudal de votos en las elecciones de 1868, había decidido confrontar con Avellaneda en las elecciones de 1874. Sin embargo, optó por acompañar a Nicolás

¹⁷ Carlos D’Amico, *Buenos Aires, sus hombres, su política (1860–1890)*, Americana, Buenos Aires 1952.

Avellaneda, creando el Partido Autonomista Nacional (PAN) que llevó al candidato de Sarmiento a la presidencia. Alsina asumió el Ministerio de Guerra y Marina. Una vez más, las elecciones fueron fraudulentas y Mitre encabezó una revolución que fracasó tras una breve pero sangrienta guerra civil. A partir de ese momento, el PAN se convertiría en la fuerza política dominante hasta principios del siglo XX.

Avellaneda asumió la presidencia continuando con la política de su predecesor, enfrentó la crisis económica heredada y decidió pacificar el clima político indultando a Mitre y a otros cabecillas de la fracasada revolución, a quienes les restituyó sus grados militares y reincorporó al ejército.

El 29 de diciembre de 1877, inesperadamente, falleció Adolfo Alsina y fue sucedido por Julio Argentino Roca en el Ministerio de Guerra, militar que había participado en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Desde ese cargo emprendió su “campana al desierto” destinada a incorporar a la república los territorios de la Patagonia. Esa región estaba prácticamente deshabitada de gente de raza blanca pero habitaban poblaciones indígenas nómadas, mayoritariamente los *mapuches* que en realidad eran los *araucanos*, pueblo originario del territorio chileno que fue expulsado de Chile y que cruzó los Andes, expandiéndose desde el norte de la Patagonia hasta parte de la provincia de Santa Cruz. Los mapuches atacaban las estancias que se encontraban ubicadas en los confines, robaban ganado para venderlo en Chile y secuestraban mujeres. Esta situación llevó a Roca a lanzar la conquista de ese territorio ocasionando un gran exterminio de la población aborigen.

Con miras a las elecciones presidenciales de 1880, Roca consolidó la Liga de Gobernadores que no fue más que una alianza de los grupos dirigentes del interior deseosos de mantener el control del poder nacional. Roca se postulaba en las elecciones como candidato del PAN y sucesor de Avellaneda. Su opositor en esas elecciones fue Carlos Tejedor, gobernador de la provincia de Buenos Aires desde 1878 y Ministro de Relaciones Exteriores del presidente Sarmiento. Como gobernador se mostró hostil al gobierno nacional presidido por Avellaneda y, como el gobierno federal tenía asiento dentro de Buenos Aires, lo calificó de “simple huésped” de la provincia.¹⁸ Dada su intransigencia, sus partidarios lo designaron candidato a la presidencia de la República en los comicios de 1880. Para ello contó con el apoyo de los núcleos cercanos a Mitre pero, además, se produjeron levantamientos en las provincias de Córdoba y de Santa Fe. Tejedor no sólo se oponía a Roca sino también a la federalización de la ciudad de Buenos Aires como capital de la Nación.

¹⁸ Al asumir el mando el 1º de mayo de 1878, Tejedor expresó: “La constitución federal traza claramente la línea que divide la acción del gobierno general de los gobiernos de provincia; y esa línea será sagrada para mí, procurando conciliar las prerrogativas propias con la obediencia que en asuntos nacionales debemos a nuestro huésped.”

El 11 de abril de 1880 Roca triunfó en las elecciones y el presidente Avellaneda anunció su decisión de convertir a Buenos Aires en capital de la Nación. Tejedor no aceptó los resultados y lideró a quienes se oponían a esa medida, para lo cual armó a las fuerzas provinciales para enfrentar a Avellaneda. En junio de ese año se produjo un enfrentamiento entre las partes. Ante la gravedad de la situación, el gobierno federal y el Congreso se trasladaron al pueblo de Belgrano¹⁹ que fue declarado sede del gobierno nacional. Sin embargo, los partidarios de Tejedor fueron vencidos en los combates de los Corrales, Barracas y Puente Alsina.²⁰ El gobernador debió renunciar, aunque no se alejó de la política, y en su lugar asumió el vicegobernador José María Moreno. Finalmente, Buenos Aires fue federalizada y convertida en capital de la Nación.

Julio Argentino Roca se consolidó como el hombre fuerte, dando origen a un largo ciclo en el que su figura sólo declinó durante la primera década del siglo XX. Con Roca emergió ese grupo dirigente que en la historia argentina es conocido como la “generación del 80”. Una vez que Roca asumió la presidencia, continuó desarrollando el proceso de centralización de las funciones estatales, erradicando funciones que hasta ese momento estaban en manos de la Iglesia. Así fue como creó el Registro Civil y sancionó la ley Federal de Educación²¹, lo cual derivó en el conflicto con la Iglesia que culminó con la expulsión del nuncio apostólico y la ruptura de relaciones con la Santa Sede. Las relaciones con la Iglesia recién serán restauradas durante el segundo gobierno de Roca (1898–1904).

Durante su gobierno fue notable la expansión del crédito, dándose también un desarrollo del tendido de vías férreas, expandiéndose, en especial, en la región pampeana y consolidando, de esa manera, el modelo agroexportador. Al mismo tiempo, comenzó una fuerte fiebre especulativa que desencadenó la crisis de 1890.

Un testimonio relevante de la época es el de Carlos Guerrero, destacado estanciero argentino que, en 1879, importó los primeros reproductores de raza *Aberdeen Angus* a la Argentina, procedentes de Escocia. Su actividad ganadera giró en torno a la producción de vacunos de esa raza en su cabaña “Charles” en la provincia de Buenos Aires. No tuvo una carrera política trascendente pero luego se unió a la Unión Cívica, partido que más tarde cobró protagonismo en

¹⁹ En la actualidad Belgrano es un barrio más de la ciudad de Buenos Aires.

²⁰ Los combates fueron de una gravedad considerable ya que en el Combate de Barracas se registraron 3.000 bajas, mientras que en los combates de Puente Alsina y de Los Corrales se produjeron un total de 1.200 muertos.

²¹ La ley 1.420 del 8 de julio de 1884, en sus ochenta y dos artículos, divididos en nueve capítulos, representó un progreso considerable en materia educativa, reduciendo el analfabetismo al 53% en diez años y, para 1914, los analfabetos representaban el 35 %. La ley adoptó una educación no totalmente laica debido a que, en materia religiosa, serían los progenitores quienes decidirían si sus hijos debían recibirla. No obstante, la enseñanza religiosa se impartiría en horario extraescolar.

el escenario político argentino. En sus escritos, Guerrero reflexiona sobre las prácticas políticas y la corrupción del sistema desde 1890 que hubo de dejar rezagada a la provincia de Buenos Aires:

Es triste decirlo, pero muy lejos de ocupar el primer rango administrativo se ha quedado atrás de sus hermanas y es necesario por el bien de la Nación que recupere su crédito perdido.

Todo ha cambiado ya; no es lo que fue esta provincia antes del año 1880, durante los gobiernos de Obligado, Alsina, Saavedra, Castro, Acosta, Tejedor. Estos gobernadores cuidaban escrupulosamente de la moral pública y de los nombramientos dependientes del Poder Ejecutivo, desde los jueces de paz que desempeñaran el cargo equivalente a los actuales intendentes de partido y de ellos además dependían los comicios de policía. Estos nombramientos recaían siempre de sus acciones como autoridades. Por esta causa no era cosa común que se produjesen tantas averías en las cuentas comunales, como en la actualidad.

Por varios años hasta 1880 desempeñé el cargo de Juez de Paz en el Partido del Tuyú; único puesto oficial que he ocupado en mi país en mi larga vida de trabajo.

En ese cargo gratuito, que traté de desempeñar con la corrección y mayor dedicación que me fue posible, tuve la satisfacción de entregar a mi reemplazante, nombrado por el gobierno del Doctor Rocha, la cantidad de 316.600 pesos moneda nacional corriente en una libreta del Banco de la Provincia como tesoro del Partido. Esta cantidad en aquella fecha era de bastante importancia; pero quiero evitar comentarios en todo lo que sea personal.²²

En el plano internacional se produjo un conflicto de límites con Chile, en relación a la región patagónica, que se saldó con una delimitación de la frontera aceptada por ambos países. También, aunque en una menor dimensión, debió solucionar cuestiones limítrofes con Brasil.

No casualmente, el sucesor de Roca resultó ser su cuñado, Miguel Ángel Juárez Celman, otro representante del interior que, en principio, garantizaba la continuidad del régimen. En un comienzo Dardo Rocha y Bernardo de Irigoyen se enfrentaron a Celman por el control del PAN pero Roca logró imponer a su cuñado. A pesar de que Mitre intentó imponer sus candidatos opositores, el triunfo de Juárez Celman en las elecciones fue aplastante.

A poco de asumir, en 1886, Juárez Celman propició la centralización del poder, con su política denominada “unicato”, tratando de concentrar el poder político que su cargo de presidente le confería con el control del partido. Hecho que provocó la ruptura con Roca.

Al mismo tiempo, se profundizó la fiebre especulativa, por medio de préstamos y emisiones que prácticamente no tuvieron respaldo. Este proceso condujo a una crisis económica que provocó que la oposición conformara una nueva estructura política compuesta por sectores partidarios del general Mitre, jóvenes universitarios, católicos y algunos miembros de la élite que impugnaban las prácticas políticas tradicionales del gobierno. Así se creó un frente opositor, la Unión Cívica, cuyo presidente era Leandro N. Alem y cuya mayor expresión

²² Carlos Guerrero, *Publicaciones prácticas de ganadería, agricultura e higiene agropecuaria*, Martino y Gutiérrez, Buenos Aires 1915, págs. 230–231.

fue el movimiento revolucionario de 1890: la Revolución del Parque, también conocida como Revolución del 90. Se trató de una insurrección cívico-militar que tuvo lugar el 26 de julio de 1890 y que fue liderada por Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen y Francisco Barroetaveña, entre otros. Precisamente y en referencia a la corrupción del gobierno de Juárez Celman, el 20 de agosto de 1889, Francisco Barroetaveña publicó en el diario *La Nación* una nota de opinión titulada “¡¡Tu quoque juventud!!”, de gran repercusión, de la que merece citarse el siguiente párrafo:

En medio de este general desgobierno, o del imperio de este régimen funesto, que suprime la vida jurídica de la nación reemplazándola por el abuso y la arbitrariedad, se sienten los primeros trabajos electorales para la futura presidencia, asegurándose que el Presidente actual impondrá al sucesor que se le antoje, pues dispone del oro, de las concesiones y de la fuerza necesaria para enervar los caracteres maleables y sofocar cualquier insurrección.²³

La revolución fue derrotada por el gobierno pero obligó al presidente Juárez Celman a renunciar y a delegar el cargo en el vicepresidente Carlos Pellegrini.

El general Roca fue reconocido como un hábil político y un astuto manipulador de las debilidades ajenas y esa astucia llevó a que se lo conociera como “el zorro”. Precisamente, se le endilga su responsabilidad en la caída de Juárez Celman.²⁴

Pellegrini conformó su gabinete con varios partidarios de Mitre. Tres de sus cinco ministros correspondían a ese grupo: Vicente Fidel López ocupó la cartera de Finanzas, Eduardo Costa la de Relaciones Exteriores y Juan M. Gutiérrez la de Educación, en tanto que Julio A. Roca fue designado Ministro del Interior.

La oposición intentaba reorganizarse y esperanzada se reunió en Rosario, proclamando la fórmula Mitre-Bernardo de Irigoyen. El 12 de marzo de 1891, Leandro N. Alem y Aristóbulo Del Valle fueron elegidos senadores nacionales por la Capital Federal. Sin embargo, pocos días después de su regreso de Europa, Mitre recibió la visita de Roca, con quien acordó la fórmula presidencial para las elecciones de 1892, dejando de lado a Bernardo de Irigoyen, quien fue reemplazado por el autonomista José Evaristo Uriburu en el segundo término de la fórmula presidencial. La nueva estructura partidaria fue el Partido Nacionalista y su presidente fue el mismo Roca. Poco duró el acuerdo y los problemas

²³ Francisco Barroetaveña, *¡Tu quoque juventud!*, “La Nación”, 20 de agosto de 1889.

²⁴ Algunos autores dejan traslucir que el movimiento revolucionario había sido manipulado de modo tal que fracasara pero que, al mismo tiempo, desestabilizara al gobierno. Para algunos de ellos hubo un pacto entre Roca y Mitre, cuyo amigo, el general Luis Campos, no cumplió en su totalidad con el plan preconcebido desde un principio. Así la revolución fue vencida pero con cierta complicidad de Roca, Juárez Celman tuvo que presentar su renuncia, y fue reemplazado por el Vicepresidente Carlos Pellegrini, miembro de una tradicional familia porteña.

permanentes provocaron la renuncia de Mitre. Según David Rock, los gobernadores provinciales partidarios de Roca se resistieron a este acuerdo, al punto que hubo serios hechos de violencia en algunas de las provincias. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes, amigos del gobernador asesinaron a varios seguidores de Mitre porque no estaban dispuestos a darles participación en los cargos locales. Esa fue la razón que hizo naufragar el acuerdo.²⁵

Al mismo tiempo el acercamiento de Mitre a Roca provocó la ruptura de la Unión Cívica, fundándose en 1891 con los sectores más intransigentes que impugnaban el fraude electoral, la Unión Cívica Radical, encabezada por Leandro N. Alem. Esta fue, en verdad, la primera estructura partidaria argentina. Su prédica fue la apertura política o la revolución.

Poco después, en las elecciones de senador y diputados nacionales por la Capital, el radicalismo logró la elección de Leandro N. Alem. Según el historiador Félix Luna, estas elecciones fueron sumamente violentas.²⁶

El presidente Pellegrini superó la crisis económica y, convocadas las elecciones en 1892, un nuevo frente opositor se presentaba con posibilidades electorales. Él mismo impulsaba la candidatura de Roque Sáenz Peña, tras lo cual, “el zorro” Roca propuso un cónclave de antiguos partidarios de Juárez Celman, de Mitre, autonomistas y católicos sueltos y así sumó al oficialismo al padre de ese candidato, Luis Sáenz Peña, miembro de la Corte Suprema. Finalmente se impuso esta fórmula, cuyo vicepresidente Uriburu, era un hombre vinculado a los sectores financieros ingleses.²⁷ En la oposición, la Unión Cívica Radical (UCR) presentó la fórmula Bernardo de Irigoyen – Juan M. Garro. Para evitar la competencia de la UCR, el presidente Pellegrini –con el argumento de la existencia de un plan para derrocar al gobierno–, implantó el estado de sitio y encarceló a Leandro N. Alem. De ese modo, se impuso la fórmula encabezada por Luis Sáenz Peña, quien al año siguiente de asumir no sólo tuvo problemas para enfrentar la crisis económica sino que también debió enfrentar una serie de problemas políticos.

Una vez en el gobierno, Luis Sáenz Peña debió negociar con sus electores –Roca, Mitre y Pellegrini– y, temporariamente, contó con el apoyo de su hijo y hasta con el de la Iglesia. Su intento de gobernar por sobre todas las facciones resultó impracticable y sus ministros se enfrentaron con la oposición del Congreso, por lo cual, a principios de 1893, debió cambiar a sus ministros y reemplazarlos por partidarios de Roca. El nuevo giro presidencial consistió en llamar a Mitre, Roca y Pellegrini. En 1895, Sáenz Peña renunció y fue reemplazado por José Evaristo Uriburu, vinculado al PAN, quien facilitó la elección

²⁵ David Rock, *La construcción del Estado y los movimientos políticos en la Argentina 1860–1916*, Prometeo, Buenos Aires 2006, págs. 233–234.

²⁶ Félix Luna, *Irigoyen*, Buenos Aires 1986, pág. 92.

²⁷ *Ibid.*, págs. 92–93.

de Roca en 1898, apoyado por los partidarios de Mitre, en un contexto en el que muchas de las provincias estaban intervenidas.

En 1896, desilusionado y sin fuerzas para seguir enfrentando el fraude, el líder de la UCR, Leandro N. Alem, se suicidó y el liderazgo del partido quedó en manos de su sobrino Hipólito Yrigoyen.

Uriburu completó el mandato hasta que “el zorro” Roca volvió a asumir la presidencia en 1898. Con respecto a la política exterior, la guerra con Chile parecía inminente debido a los desacuerdos en las cuestiones limítrofes. En su segunda presidencia Roca continuó con su política de modernización del país y resolvió varias de esas cuestiones limítrofes.

Cabe destacar que desde 1880, año en que Roca asumió su primer período presidencial, el escenario político argentino incorporó nuevos partidos. Uno de ellos fue el Partido Socialista con nuevas propuestas para la sociedad, tanto en materia educativa como en el marco de los derechos civiles, solicitando la introducción de los comicios universales. Su líder y fundador fue el médico cirujano y periodista Juan Bautista Justo, quien formó parte de la Unión Cívica de la Juventud y, en 1889, de la Unión Cívica. Durante la Revolución del Parque, en 1890, atendió a los revolucionarios heridos.

Hacia mediados del siglo XIX, impulsado por Félix Frías, también comenzó a tomar cuerpo lo que, años después, se convertiría en el catolicismo social. Frías advertía sobre las consecuencias que acarrearía el capitalismo en Europa: pobreza y miseria. Estas ideas fueron recogidas por la Iglesia Católica Argentina que comenzó a advertir a los dirigentes políticos acerca de las concepciones liberales y de las consecuencias que podría tener la creciente industrialización²⁸. De alguna manera, el catolicismo social también debía enfrentar al anarquismo que se introducía en la Argentina de la mano de algunos inmigrantes europeos.

La segunda presidencia de Roca lo mostró mucho más debilitado con respecto de la primera, si bien las exportaciones continuaban creciendo a un ritmo vertiginoso. Igual quedaba pendiente la resolución del problema de la deuda externa, para lo cual el Ministro de Hacienda, Carlos Pellegrini, negoció el pago de la misma, comprometiendo los recursos aduaneros. Esto provocó una fuerte oposición a tal punto que sin el respaldo presidencial, el ministro, debió renunciar a su cargo.

En el plano externo se reanudaron los problemas limítrofes con Chile, estando casi a punto de desencadenarse un conflicto bélico, solucionándose el mismo cuando se firmaron una serie de pactos. Por otra parte se reanudaron las relaciones con el Vaticano, cuya ruptura, como ya lo hemos consignado, se había producido en la primera presidencia, durante la década de 1880. En el

²⁸ Jorge Alberto Núñez, *De Félix a Jorge H. Frías: catolicismo social, beneficencia y Estado en la Argentina*, en: Un Poco de Historia, <http://www.unpocodehistoria.com/publicaciones/catolicismo-social.php>, consulta: 17 de septiembre de 2010.

orden interno se intentó una reforma electoral que permitió acceder a una banca al diputado socialista Alfredo Palacios, constituyéndose el primer legislador socialista de América. De todos modos, esto apenas resultaba un paliativo con relación al fraude que seguía vigente. Otro hecho importante resultó la sanción de la ley de residencia que facultaba al gobierno a expulsar a aquellos inmigrantes que transgredieran el orden político. Esta ley fue motivada por el asesinato del Jefe de Policía, Ramón L. Falcón, por parte del movimiento anarquista.

Las divergencias con Pellegrini debilitaron la capacidad de Roca de controlar el partido, por lo que su sucesor debió consensuar con una junta de notables, los que designaron a Manuel Quintana como candidato presidencial, acompañado por Figueroa Alcorta, asumiendo la presidencia en 1904.

En 1905 estalló una nueva revolución radical, la que fue rápidamente sofocada. Este hecho supuso un cambio de estrategia de esta agrupación que se orientó hacia una organización más de base, fortaleciendo los comités partidarios, los que mediante acciones comunitarias iban obteniendo el apoyo de los sectores populares en los centros urbanos. De todos modos, también el radicalismo, a diferencia del socialismo, iba teniendo importantes adhesiones en el interior.

Este avance de la Unión Cívica Radical, junto con el fallecimiento de Quintana en 1906, posibilitó que con la asunción de Figueroa Alcorta a la máxima magistratura, comenzaran las negociaciones para lograr una apertura del sistema político, hecho que también fue facilitado por una relación cada vez más tensa entre el Poder Ejecutivo y el parlamento que llegó al cierre del mismo debido a la resistencia a aprobar el presupuesto del año 1908. En esa coyuntura se llevaron a cabo dos encuentros secretos entre Figueroa Alcorta y el líder radical Hipólito Yrigoyen, los que intentaban allanar una posible salida. Al no lograr los resultados esperados, Yrigoyen hizo públicas estas conversaciones.

De todos modos, tarde o temprano, el sistema político terminó modificándose con el sucesor de Alcorta, Roque Sáenz Peña, quien asumió para el centenario de la Revolución de Mayo de 1810 y se dispuso a enaltecer esas páginas de la historia nacional. En 1910 se percibía el progreso de la economía argentina. El país era la novena economía mundial por su producción agrícola-ganadera, sólo superada por Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España, Bélgica y Canadá. Sin embargo, también se observaba la presencia de un anarquismo que no cedía en sus reclamos y de un radicalismo expectante. A raíz de un atentado en el Teatro Colón se sancionó otra ley, la de Defensa Social, que daba al Estado mayores facultades para reprimir, ya que no solamente se podían penalizar las acciones terroristas sino también las actividades ideológicas. Estas tensiones llevaron al elenco gubernamental a plasmar la ley Sáenz Peña en 1912, la cual introdujo el voto secreto, universal y obligatorio.

En ese mismo año, el conflicto rural entre estancieros y arrendatarios tomó un rumbo decisivo, ya que una serie de malas cosechas provocó que estos últimos se organizaran en una entidad que se autodenominó Federación Agraria Argentina, que si bien no obtuvo las demandas requeridas en esa coyuntura, logró paliar su situación en la década siguiente.

En 1914 falleció el presidente Luis Sáenz Peña, siendo su sucesor el vicepresidente Victorino de la Plaza. En ese mismo año la Primera Guerra Mundial impactó fuertemente en la economía argentina ya que hubo una significativa disminución de las importaciones, situación que provocó un fuerte proceso inflacionario y una merma de las exportaciones agrícolas no compensadas con un aumento de las ganaderas

La ley Sáenz Peña, sumada a la división del partido gobernante con la creación del Partido Demócrata Progresista, encabezado por Lisandro De la Torre, permitió a la Unión Cívica Radical ganar las elecciones de 1916.

Los gobiernos radicales y la ampliación de la participación ciudadana (1916–1930)

El triunfo ajustado del radicalismo, lo conduce a una compleja gobernabilidad tanto por la coyuntura bélica internacional y la disparidad en términos de intercambio, como así también, a nivel político ya que la UCR no tuvo mayoría en la cámara de diputados hasta el año 1918 y en la de Senadores no llegó a tenerla. De tal manera que eso le impedía al gobierno responder a las expectativas planteadas por el electorado.

Para responder en esa dirección llevó a cabo un aumento notable del empleo y, por ende, del gasto público, medidas estas sumamente criticadas por la oposición. Además, las provincias en su mayoría estaban gobernadas por la oposición conservadora y, para resolver este problema, Yrigoyen –argumentando la falta de legitimidad de los gobiernos regionales– profundizó las intervenciones provinciales llevadas a cabo por los conservadores e intervino en total diecinueve provincias, quince de ellas por decreto y cuatro con el acuerdo de las cámaras. Este hecho deterioró las relaciones con la oposición y así fue como se sucedieron numerosas interpelaciones.

En materia social, en sus inicios, las huelgas tuvieron un tratamiento diferente por parte del gobierno, el que mostró una política más conciliadora que supuso una alianza con la tendencia apolítica sindicalista, cuyos gremios –formados sobre todo por obreros nativos– en muchos casos obtuvieron, luego de un período de huelgas, mejoras significativas. Esta política de conciliación gubernamental pretendiendo la armonía de clases era cuestionada por las entidades empresarias. En cambio, cuando el conflicto involucraba a sindicatos anarquistas o socialistas, sus demandas no fueron, en general, escuchadas.

La conflictividad se agudizó hacia fines de la década. Por una parte, las demandas de los estudiantes de mayor participación en la vida política universitaria y la defensa de las autonomías de estas casas de estudios fueron finalmente apoyadas por el gobierno llevándose a cabo la reforma de 1918. Por otra parte, en 1919, el conflicto en los talleres metalúrgicos Vassena –ubicados al sur de la ciudad de Buenos Aires– provocó un levantamiento popular que desbordó el accionar de la policía y que terminó siendo reprimido dejando un saldo de centenares de muertos por el accionar del ejército y de grupos paramilitares denominados “La Liga Patriótica Argentina”. Además, un levantamiento en la Patagonia, llevado a cabo por obreros rurales, sobre todo chilenos pero cuya dirección estaba siendo especialmente organizada por inmigrantes europeos, también fue reprimido sanguinariamente, causando un número de víctimas aún mayor que el movimiento porteño.

Esta conflictividad de fines de la década de 1910, tuvo su correlato en la década siguiente, cuando los arrendatarios pampeanos, presionando al gobierno de Yrigoyen, lograron la sanción de la tan reclamada ley de arrendamientos rurales, la que les permitió la obtención de algunas “libertades capitalistas”, ya que lograron, desde la firma de contratos de arrendamientos, no tener que sufrir los abaratares de los desalojos continuos, hasta poder decidir que producir.

Debilitada la imagen del gobierno ante los sectores empresarios, Yrigoyen dispuso que el nombramiento de su sucesor debía recaer en un integrante del partido que representara a una familia tradicional. De este modo, en las elecciones llevadas a cabo en 1922, Marcelo T. de Alvear resultó su sucesor. Sin embargo, cuando Alvear conformó su gabinete de gobierno, pocos seguidores de Yrigoyen lo integraron. Además, su intención de disminuir el gasto público provocó primero la distancia y luego la ruptura con Hipólito Yrigoyen en 1924.

Los últimos años del gobierno de Alvear, si bien mostraron síntomas de recuperación económica, con un repunte de las exportaciones agrícolas, en el plano político se fue consolidando un sentimiento contrario a Yrigoyen que reunió a distintos sectores del propio partido del gobierno –los denominados “antipersonalistas”²⁹–, de las Fuerzas Armadas –quienes no aceptaban la politización de la fuerza–, miembros de otros partidos políticos y algunos admiradores de las experiencias autoritarias europeas.

Por su parte, Hipólito Yrigoyen, enarboló posiciones nacionalistas en vísperas de las elecciones presidenciales de 1928. Con estos postulados logró imponerse cómodamente a la fracción antipersonalista de la UCR. Aunque poco duró este consenso y los avatares de la crisis de Wall Street de 1929 debilitaron el sistema capitalista y pusieron en evidencia la vulnerabilidad de la economía argentina.

²⁹ Los antipersonalistas, en general, eran miembros de la UCR que provenían de las familias tradicionales. Muchos respondían al núcleo de seguidores de Leandro N. Alem de los primeros años de existencia del partido. Se oponían al estilo de conducción verticalista de Hipólito Yrigoyen.

Obviamente, las caídas de las exportaciones agropecuarias y el alza de las manufacturas, debilitaron el sistema de patronazgo del gobierno radical, ya que el empleo público no podía mantener su ritmo expansivo como las promesas electorales habían augurado. Además, la pretensión de nacionalizar los recursos petroleros contó con la resistencia de las provincias petroleras, las que no querían compartir las regalías. Al mismo tiempo, para resolver esta como otras cuestiones, el gobierno apeló nuevamente a las intervenciones provinciales que provocaron hechos sumamente violentos.

El 2 de marzo de 1930 se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias, en las que la UCR perdió estrepitosamente en la ciudad de Buenos Aires y retrocedió su caudal electoral en todo el país. Yrigoyen tenía 77 años y aún debía gobernar otros cuatro años para concluir su mandato. La debilidad de su gobierno era crítica y no podía enfrentar la grave situación económica y política, menos aún con su propio partido dividido. El escenario se agravó cuando el gobierno, el 1º de agosto, tomó la decisión de que la empresa petrolera estatal YPF interviniera en el mercado petrolero para fijar el precio y romper los *trusts*.

El 6 de septiembre de 1930, Yrigoyen fue depuesto por el primer golpe de Estado de la época constitucional, el cual contó con el respaldo de la prensa, del ejército y de la oposición conservadora. Los militares asumieron el poder en la persona del general José Félix Uriburu e Yrigoyen fue detenido en la isla Martín García.

En ese mismo mes nació, tras la fusión de dos centrales obreras³⁰, la Confederación General del Trabajo (CGT) que reunió a poderosos gremios, entre ellos el de los trabajadores ferroviarios, municipales y de comercio. La CGT tendrá, años más tarde, un papel protagónico.

Inicio del ciclo de alternancia de gobiernos militares y civiles

Con este golpe militar se quebró el régimen democrático y se inició un ciclo que se denominó la “década infame” en la que el fraude electoral volvió a estar presente en el escenario político, permitiendo que los conservadores y la oligarquía vinculada al modelo agroexportador se adueñara del gobierno. Uriburu gobernó aproximadamente dieciocho meses bajo el estado de sitio y la ley marcial. Disolvió el Congreso y mantuvo la práctica de intervenir las provincias y las universidades.

A pesar de que su gobierno fue autoritario, en 1931 se llevaron a cabo elecciones para elegir gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para sorpresa del gobierno, las elecciones fueron ganadas por el candidato de la UCR, lo que debía

³⁰ La Confederación Obrera Argentina (COA), vinculada con el socialismo y la Unión Sindical Argentina (USA), de tendencia sindicalista.

entenderse como un serio mensaje de la población hacia el gobierno militar que decidió anularlas bajo el pretexto de que se cometió fraude. De todos modos, quedó en evidencia que el modelo fascista de gobierno había fracasado. Uriburu llamó nuevamente a elecciones tras proscribir a la UCR y, desde febrero de 1932, luego del fracaso de su gobierno corporativo, asumió el general Agustín P. Justo.

El golpe militar de 1930 quebró la institucionalidad y puso fin al período de desarrollo económico y político que se inició en 1880 y abrió un largo ciclo de alternancia de gobiernos militares y civiles que se extendieron hasta 1983.

El general Agustín P. Justo intentó otorgarle a su gobierno una apariencia democrática para lo cual formó la Concordancia, una extraña alianza que integró a miembros de diversos partidos, entre ellos socialistas, conservadores y radicales antipersonalistas.

El régimen debió enfrentar sublevaciones encabezadas por oficiales militares alineados con la UCR, como la de febrero de 1931 liderada por el general yrigoyenista Severo Toranzo o la del coronel Gregorio Pomar, ex edecán de Yrigoyen, en la provincia de Corrientes. Por su parte, el ex Presidente Marcelo T. de Alvear regresó al país y se puso al frente de la UCR. con el visto bueno de Yrigoyen y de la mayoría del partido.

Al mismo tiempo que se llevó a cabo un proceso de sustitución de importaciones el Estado interventor reinsertó la economía en el modelo agroexportador y su dependencia del Reino Unido. Una prueba de ello fue el pacto Roca – Runciman firmado en 1933 por el cual se convino la venta de carne a esa potencia y se favoreció a los grandes frigoríficos británicos. El senador del Partido Demócrata Progresista Lisandro de la Torre llevó a cabo la investigación que procuraba dejar en evidencia las irregularidades protagonizadas por los frigoríficos de capitales británicos en el comercio de la carne. Agobiado y sin fuerzas para continuar enfrentando la corrupción, Lisandro de la Torre, se retiró de la política y en 1939 se suicidó.

En el comercio internacional, los términos de intercambio seguían sin favorecer a la Argentina ya que las exportaciones agropecuarias estaban en desventaja frente a los productos manufacturados. Como consecuencia de ello nacieron las industrias textiles, de medicamentos, de electrodomésticos, de maquinaria agrícola y de productos químicos que se afincaron en la ciudad de Buenos Aires, en las localidades próximas a ésta, en la ciudad de Bahía Blanca y en las provincias de Santa Fe y Córdoba. En la búsqueda de nuevas oportunidades laborales, se registró un movimiento migratorio desde las áreas rurales hacia las urbanas, dando origen a los primeros asentamientos precarios, denominados “villas miserias”.

El general Agustín P. Justo gobernó hasta 1938, año en que se celebraron las elecciones presidenciales que llevaron al gobierno al candidato de la Concordancia, Roberto Ortiz, y Ramón Castillo, tras otros comicios que fueron

considerados fraudulentos. El presidente Ortíz se había propuesto poner fin al fraude pero su estado de salud se agravó y, en 1942, fue sucedido por el vicepresidente Ramón Castillo, quien —en términos de política exterior— mantuvo la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial pero que, en lo que respecta a la política interna, retomó el sistema de fraude.

El 4 de junio de 1943, una logia denominada GOU (Grupo de Oficiales Unidos), que apoyaba al Eje y que temía que Argentina se sumara al bando de los aliados, llevó cabo un golpe de Estado que destituyó al presidente Castillo. El que fuera Ministro de Guerra asumió la presidencia y nombró en ese ministerio al coronel Juan Domingo Perón, quien comenzó su acercamiento a las medidas de carácter social a través de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Este nuevo golpe militar, que también recurrió a la proscripción y al autoritarismo, puso fin al ciclo de la década infame de la restauración conservadora.

Desde 1943 hasta 1955 el coronel Juan Domingo Perón protagonizó el escenario político, siendo secundado por los sindicatos. Las políticas implementadas por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión a favor de los trabajadores industriales urbanos fueron encontrando respuesta en la consolidación de una fuerza política cada vez más significativa.

Desde su llegada a la función pública, Perón comenzó a construir una meteórica carrera política. En junio de 1944 asumió como vicepresidente reteniendo sus otros cargos. Sin embargo, el 12 de octubre de 1945, el general Farrell detuvo al coronel Perón, lo que produjo que surgiera una movilización de trabajadores para exigir su liberación.³¹ Para reclamar el mantenimiento de los beneficios laborales obtenidos gracias a la gestión de Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Comité Central de la CGT había declarado una huelga general para el día 18 pero el 17, grandes masas del conurbano marcharon hacia la Plaza de Mayo exigiendo su liberación. La jornada del 17 de octubre de 1945 fue clave para que Perón se involucrara en la campaña presidencial con un discurso nacionalista usando básicamente las estructuras del pequeño Partido Laborista, de clara base obrera sindical, liderado por el dirigente de los trabajadores de los frigoríficos de Berisso, Cipriano Reyes.³²

De ese modo Perón organizó su base de poder profundizando su asociación con los sindicatos, de manera tal que los trabajadores fueron los principales pilares de su movimiento político. Con ese respaldo podía enfrentar a sus enemigos. Para ello recurrió a su experiencia de vida en Europa, en la época

³¹ Su detención se debió a un conato de golpe militar por parte de algunos sectores que solicitaron la renuncia de Perón. El gobierno aceptó las presiones para evitar su caída y Perón renunció. Para esos sectores de las Fuerzas Armadas, Perón era visto con desconfianza.

³² Roberto Rubén López, Guillermo Eduardo Colombo, *Historia de los partidos políticos en la Argentina desde 1940 al 2004*, "Anales de la Facultad de Ciencias Empresariales", tomo I, núm. 2, Universidad Abierta Interamericana (UAI), Buenos Aires 2006, págs. 71-87.

de la conformación del fascismo, para articular la gran movilización de masas. Así, habría realizado una simbiosis entre el “modelo bonapartista” y el “modelo fascista” para la construcción de poder. También hizo uso de la apertura política del radicalismo de Yrigoyen que extendió a los sectores obreros con el aditamento de la percepción corporativa y fascista para construir un movimiento de carácter popular.

Un gran respaldo a su acción de gobierno lo constituyó su esposa, Eva Duarte de Perón –afectivamente llamada Evita por sus partidarios– quien, a través de la fundación que llevaba su nombre, tuvo a su cargo la acción social. Su presencia fue importante para incorporar a las mujeres en el sufragio electoral para los comicios siguientes. Eva Perón falleció el 26 de julio de 1952.

Sobre un esquema de gobierno clientelar y luego de reformar la constitución Perón obtuvo el triunfo y asumió la segunda presidencia en 1952 pero, para ese entonces, el enfrentamiento con la oposición ya era muy duro. Las medidas utilizadas por el oficialismo para acallar a la oposición despertaron fuertes críticas en los diputados de la oposición, entre ellos, los de la UCR Arturo Frondizi y Ricardo Balbín. Este último incluso perdió sus fueros y fue encarcelado. La persecución también se amplió a militantes socialistas y comunistas.

Finalmente, perjudicada la economía argentina por el plan Marshall, el gobierno de Perón fue derrocado en 1955 por la Revolución Libertadora encabezada por los máximos dirigentes de las Fuerzas Armadas. Desde ese momento, el tutelaje de las mismas sobre la actividad política fue muy fuerte y no tuvo miramientos para interrumpir los procesos democráticos cuando lo consideraba necesario.

De la mano de las Fuerzas Armadas gobernaron ciertos sectores corporativistas vinculados a un rancio liberalismo que, en buena medida, colisionaba con los intereses nacionales.

Caudro 1. Presidentes entre 1930 y 2010

Presidente	Profesión	Período	Causa de finalización
1	2	3	4
José Félix Uriburu	Militar	1930–1932	Elecciones
Agustín P. Justo	Militar	1932–1938	Elecciones
Roberto M. Ortiz	Abogado	1938–1942	Renuncia
Ramón S. Castillo	Abogado	1942–1943	Golpe de Estado
Pedro Pablo Ramírez	Militar	1943–1944	Golpe de Estado
Edelmiro Farrell	Militar	1944–1946	Elecciones

1	2	3	4
Juan Domingo Perón	Militar	1946–1952	Elecciones
Juan Domingo Perón	Militar	1952–1955	Golpe de Estado
Eduardo Lonardi	Militar	1955–1955	Depuesto
Pedro Eugenio Aramburu	Militar	1955–1958	Elecciones
Arturo Frondizi	Abogado	1958–1962	Golpe de Estado
José María Guido	Abogado	1962–1963	Elecciones
Arturo Umberto Illia	Médico	1963–1966	Golpe de Estado
Juan Carlos Onganía	Militar	1966–1970	Depuesto
Roberto Marcelo Levingston	Militar	1970–1971	Depuesto
Alejandro Lanusse	Militar	1971–1973	Elecciones
Héctor José Campora	Odontólogo	1973–1973	Renuncia
Raúl Alberto Lastiri	Sin profesión	1973–1973	Llamó a elecciones anticipadas
Juan Domingo Perón	Militar	1973–1974	Fallecimiento
Estela Martínez de Perón	Bailarina	1974–1976	Golpe de Estado
Jorge Rafael Videla	Militar	1976–1981	Traspasso del gobierno a otro militar
Roberto E. Viola	Militar	1981–1981	Depuesto
Leopoldo F. Galtieri	Militar	1981–1982	Renuncia
Reynaldo B. Bignone	Militar	1982–1983	Elecciones
Raúl Ricardo Alfonsín	Abogado	1983–1989	Elecciones. Renuncia y entrega anticipada del gobierno
Carlos Saúl Menem	Abogado	1989–1995	Elecciones
Carlos Saúl Menem	Abogado	1995–1999	Elecciones
Fernando De la Rúa	Abogado	1999–2001	Renuncia
Eduardo Duhalde	Abogado	2001–2003	Elecciones
Néstor Carlos Kirchner	Abogado	2003–2007	Elecciones
Cristina Fernández de Kirchner		2007–continúa	

Fuente: elaboración propia.

Como puede observarse en el cuadro precedente, durante el período 1955–1976 la alternancia de los gobiernos militares y de los civiles –que no podían concluir su mandato por la irrupción de los golpes de Estado– imposibilitó una continuidad política y un desarrollo económico nacionales.

El balance de un siglo largo 1862–1976. De los orígenes del liberalismo en la Argentina a la configuración de la “matriz estado-céntrica”

En la década del setenta el *neoliberalismo* fue introduciéndose en los mecanismos del Estado argentino a los efectos de ir produciendo los cambios necesarios que beneficiaron a los sectores económicos de poder y que se profundizaron particularmente en los noventa.

Las raíces del pensamiento liberal preceden al nacimiento de la Argentina como Estado-Nación. Su filosofía se halla presente en el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, quien a través de su libro *Bases y punto de partida para la organización política de la Confederación Argentina* (1852), sentó los cimientos que llevaron a la redacción de la Constitución Nacional. En esa obra deben destacarse los temas referidos a la defensa del libre comercio, a la libre navegación de los ríos y al progreso basado sobre el desarrollo industrial.

En términos políticos, Alberdi consideró el sufragio calificado en función a la instrucción, pero también a través de su lema “gobernar es poblar” otorgó prioridad a la inmigración, sentando de esta manera las bases que llevarían a que la Argentina se abriese a la inmigración. No obstante, su criterio fincaba en obtener que esa inmigración proviniera del norte de Europa, hecho que no sucedió como lo había imaginado. Ese espíritu liberal de Alberdi se encuentra plasmado en la Constitución Nacional de 1853.

Por su parte, como ya lo hemos señalado, la denominada *generación del 80* a fines del siglo XIX dio origen al período político conocido en la historia como “oligarquía liberal” en el marco de un esquema de dependencia económica comercial con el Reino Unido, el que se perpetuó de forma sostenida hasta 1930, momento en que comenzó a declinar como producto de la emergencia de un nuevo actor internacional: los Estados Unidos. La dirigencia correspondiente a la generación del 80 –a la que muchos le atribuyen el “único” proyecto de desarrollo nacional– adoptó las ideas positivistas en boga en Europa y conformaron el gobierno sobre la base de una estructura liberal, cuyas reformas residieron en el ideal de progreso. Ya se han mencionado sus tendencias políticas pero en términos económicos la oligarquía dirigente procedió al otorgamiento de concesiones, a la firma de empréstitos con los capitales extranjeros que pasaron a controlar los ferrocarriles, los puertos y los servicios públicos, la emisión de papel moneda sin respaldo y la entrega de créditos bancarios a particulares por amistad o por influencias políticas. Todo ello derivó en la especulación, en el endeudamiento del país en beneficio de algunos grupos de poder y en definitiva en la corrupción. Precisamente cien años después –entre 1989 y 2001– la dirigencia política caería en buena parte de estos procedimientos, llevando al país al borde del abismo: la obtención de dinero sin importar cómo, la especulación, las ganancias fáciles, las concesiones corruptas, la ostentación y el lujo desmedido crearon una “nueva

moral” en la sociedad argentina, similar a la que el 26 de julio de 1890 derivó en la revolución que derrocó al presidente Miguel Juárez Celman (1886–1890) y, entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, en la renuncia del presidente Fernando De la Rúa, poniendo fin al ciclo iniciado por Carlos Saúl Menem en 1989.

El año 1930 significó asimismo el fin de la tradición democrática que de manera imperfecta estaba funcionando desde 1860 en la nación. Como expresa el historiador británico Ferns, puso fin “a sesenta ocho años de un sistema político representativo liberal que, a menudo en peligro y objeto de frecuente abuso, había sobrevivido e incluso había parecido fortalecerse”.³³

Así fue como a partir de 1930 se gestó en la Argentina una política de gobierno con un fuerte intervencionismo estatal a través de la sucesiva creación de organismos, instituciones y empresas estatales como la Comisión de Control de Cambios³⁴, el Banco Central de la República Argentina, la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, etc.

De alguna manera el intervencionismo estatal fue dando el marco necesario para la emergencia, a mediados de la década del cuarenta, de la “matriz estado-céntrica” que se mantuvo vigente hasta los años noventa, pero que comenzó a resquebrajarse a partir de mediados de la década del setenta con el endeudamiento externo de los países en vías de desarrollo que luego derivó en un agónico proceso de desestatización que aún perdura. Este proceso obedeció al seguimiento de los “modelos de desarrollo” impuestos por el neoliberalismo, los cuales podían ser extrapolados y aplicados a cualquier país sin tener en cuenta los componentes socioculturales.

A partir de 1930 y hasta 1983 el escenario político argentino giró en torno a una alternancia de gobiernos democráticos derrotados por golpes cívico-militares. Estos últimos contaron en su gestión económica con funcionarios liberales, lo cual se halla marcadamente en el gobierno del autodenominado *Proceso de Reorganización Nacional* (1976–1983) –más conocido como la última dictadura militar–, cuyo principal ministro de Economía fue Alfredo Martínez de Hoz.

El retorno del liberalismo. El *Proceso de Reorganización Nacional* (1976–1983)

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas, con el apoyo de sectores civiles, protagonizaron un golpe de Estado que derrocó a la presidente María Estela Martínez de Perón. La toma del poder, en sí misma, fue incruenta y no fue una sorpresa para la gran mayoría de los argentinos.

³³ Harry S. Ferns, *La Argentina*, Sudamericana, Buenos Aires 1973, pág. 206.

³⁴ La Comisión de Control de Cambios pasó a controlar las divisas que ingresaban a través de las exportaciones. Los exportadores tenían la obligación de venderle sus divisas a la Comisión, la cual pagaba en pesos argentinos a un tipo de cambio inferior al del mercado.

El nuevo gobierno redactó un acta que fijaba el propósito y los objetivos para el Proceso de Reorganización Nacional que establecía “erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior restauración de una democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino”.

Cabe agregar que entre los objetivos del acta se destacaba la “concreción de una situación socio-económica que asegure la capacidad de decisión nacional y la plena realización del hombre argentino, en donde el Estado mantenga el control sobre las áreas vitales que hacen a la seguridad y al desarrollo (...)”.

Los militares se dedicaron a los aspectos políticos del gobierno y a la eliminación de la subversión, mientras que la economía quedó en manos de Alfredo Martínez de Hoz (1976–1981), a la sazón ministro de Economía, vinculado a los sectores agropecuarios. Martínez de Hoz implementó una fuerte política liberal y desde 1979 una política cambiaria que fijaba el valor del dólar a futuro conocida con el nombre de “tablita”.

El mismo Martínez de Hoz explicó con posterioridad su política:

Por creer en el principio de que no hay nación fuerte sin una moneda estable, habíamos exigido al país un esfuerzo considerable para quebrar la espiral inflacionaria que tuvo su efecto culminante en el último año y medio anterior al 29 de marzo de 1981. Así llegamos a que, en el último trimestre de 1980, el promedio anualizado del índice de precios mayoristas y minoristas fue inferior al 40% en comparación con el nivel de casi 1.000% cuando asumimos nuestras funciones.³⁵

Según su opinión, las críticas que suelen hacerse a su gestión sólo obedecen a fines políticos pues la responsabilidad de los desaciertos se debieron a los reclamos de aquellos sectores más afectados por este esfuerzo, que se pronunciaban críticamente por lo que se denominó “atraso cambiario”, como así también al traspaso traumático del gobierno de un presidente militar —general Jorge Rafael Videla— a otro presidente militar —general Roberto Viola— el 29 de marzo de 1981. Este traspaso, siempre según su argumentación, generó “incertidumbre y desconfianza” con la consecuente fuga de divisas. Martínez de Hoz considera:

El cambio de rumbo impuesto por las nuevas autoridades, a partir de abril de 1981, afectó seriamente la confianza que había ganado el Proceso en la opinión pública y en los mercados nacionales e internacionales.³⁶

A pesar de las justificaciones que pueda realizar el ex ministro, la realidad es contundente tanto a través de los datos económicos como por los costos

³⁵ José A. Martínez de Hoz, *Un balance de los últimos 15 años*, “Dirigencia”, noviembre de 1995, pág. 16.

³⁶ *Ibid.*

sociales que les ocasionó a los argentinos su política económica. La misma giró en torno al endeudamiento externo para sostener su “tablita cambiaria”, la apertura indiscriminada a las importaciones de productos que afectó a la industria nacional provocando el cierre de numerosas fábricas, una fuerte reducción salarial, entre otras medidas poco felices para la población.

Fue durante su gestión al frente del ministerio de Economía cuando se tomaron las primeras medidas de un liberalismo a ultranza que terminó por derrumbar la estructura industrial que la Argentina había logrado durante las décadas anteriores y que la habían consagrado como una potencia en el mundo periférico.

Cuando las Fuerzas Armadas tomaron el gobierno en marzo de 1976, la deuda externa era de casi 8.000 millones de dólares, al final de su gobierno había trepado a los 45.087 millones de dólares. Si se toman las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el año 1976 la deuda externa era de 9.378 millones de dólares y hacia 1983 de 45.069 millones de la misma moneda. En 1981, cuando Martínez de Hoz deja el ministerio de Economía, la deuda externa había superado los 35.000 millones. El perjuicio que se le ocasionó al Estado y al pueblo argentino fue aún mayor. También las empresas privadas argentinas y extranjeras contrajeron deudas que sumaron unos 14.000 millones de dólares. Durante los pocos días en que Domingo Felipe Cavallo estuvo al frente del Banco Central de la República Argentina en 1982, la deuda externa privada fue nacionalizada, favoreciendo a importantes empresas privadas argentinas como así también a las filiales de las multinacionales.

Entre los años 1978 y 1981, es decir, durante la propia gestión del ministro Martínez de Hoz, “más de 38.000 millones de dólares habrían salido de Argentina de manera ‘excesiva o injustificada’, ello estaba permitido fundamentalmente por el hecho de que cada residente argentino podía comprar 20.000 dólares por día que podían a continuación ser colocados en el extranjero”.³⁷

En los años setenta, en líneas generales, las políticas neoliberales fueron adoptadas por los gobiernos cívico-militares de América que derrocaron a los gobiernos democráticos. Cabe agregar que, en estos años, desde el Estado hubo una política de represión del terrorismo que introdujo una violación a los derechos humanos y que, además, en 1982, llevó a cabo un intento de recuperación de las islas Malvinas —arrebataadas por el Reino Unido en enero de 1833— que involucró a la Argentina en un conflicto armado en el que Londres recibió el respaldo de los Estados Unidos y de la OTAN.

En la Argentina, con el retorno a la democracia, los gobiernos democráticos asumieron bajo el fuerte condicionante de la deuda externa. El gobierno

³⁷ Eric Toussaint, *Argentina ¿El eslabón más débil de la cadena mundial de la deuda?*, “El Periódico del CEID”, año II, núm. 6, julio-septiembre, Buenos Aires 2002, pág. 1.

del presidente Raúl Alfonsín tuvo una primera gestión económica de confrontación con los organismos de crédito internacionales e intentó motorizar la creación de un “club de deudores latinoamericanos”. Sin embargo, las presiones externas e internas imposibilitaron tomar ciertas medidas que podían afectar los intereses corporativos. Por otro lado, su intención de llevar adelante las primeras privatizaciones, entre ellas la de Aerolíneas Argentinas que contemplaba la administración de la empresa por parte de la escandinava SAS, encontró una fuerte oposición en los sectores sindicales y en el Congreso en los legisladores del peronismo. Paradójicamente, las privatizaciones tuvieron que esperar a que los que se oponían llegaran al gobierno en 1989 para concretarlas.

El presidente Alfonsín renunció al gobierno antes que finalizara su mandato presionado por un “golpe de Estado económico” organizado por ciertos grupos de poder en connivencia con quien sería primero canciller y luego Ministro de Economía del gobierno de Carlos S. Menem, el Dr. Domingo F. Cavallo. Durante su campaña electoral, Menem había prometido que sus medidas económicas girarían en torno a la “revolución productiva” y un fuerte aumento de salarios que serviría para incentivar el consumo. La realidad fue que ninguna de las dos propuestas se cumplió y que, desde que asumió el gobierno a mediados de 1989 y hasta el año 1991, el fantasma de la hiperinflación siguió asustando al gobierno y a la sociedad. Desde el comienzo Menem estableció una asociación con las corporaciones económicas, fundamentalmente con *Bunge & Born* que le proporcionó sus dos primeros ministros de Economía.

En 1991 Cavallo asumió como ministro de Economía, siendo el cuarto de la administración Menem y, a partir de ese momento se pusieron en funcionamiento todas las medidas ultraliberales tendientes a abrir los mercados económico, financiero y laboral. Las medidas que no lograban ser aprobadas por la oposición del Congreso fueron impuestas por decretos presidenciales. De esta manera la Argentina abrió absolutamente su economía en un momento en que los países desarrollados se aferraron al proteccionismo como resultado de la recesión que los afectaba desde comienzos de los noventa. En este contexto debe considerarse el reordenamiento de la Comunidad Económica Europea, la reunificación de Alemania en 1991, la desaceleración de la economía de Japón y la recesión en los Estados Unidos, la que aún perdura y que se manifestó con las peores ventas navideñas en el 2002 en varios años.

Las inversiones en los años noventa se limitaron, prácticamente, al sector servicios y a la compra de las empresas estatales. Es el período en que se incrementa la concurrencia y apertura de las cadenas de supermercados e hipermercados que afectaron profundamente al comercio minorista y a algunos sectores de las pequeñas y medianas empresas (pymes) mediante la importación de productos que competían con la industria nacional. Sin duda, la secuela de ello fue un incremento en la tasa de desempleo.

En rasgos generales se repitió en los 90 la misma situación que la Argentina conoció a partir de mediados de los setenta. La sanción en 1991 de la ley de convertibilidad del ministro Cavallo, fijando la paridad cambiaria de un dólar por un peso, nuevamente impuso una ficción en la sociedad argentina que se percibió con capacidad económica al cobrar sus salarios a valor dólar. Este proceso significó un golpe más para ciertos sectores de la industria que se vieron afectados por la importación de bienes manufacturados. Se abrió así otra etapa de desindustrialización con su correspondiente incremento en la tasa de desempleo y en un aumento de la economía informal.

La ley de convertibilidad y la situación económica constituyeron una bomba que explotó durante el gobierno del presidente Fernando De la Rúa, quien no supo dar respuestas y se vio obligado a renunciar luego de un alzamiento popular que tuvo lugar los días 19 y 20 de diciembre de 2001.

Tras una seria incertidumbre institucional, asumió el gobierno el senador Eduardo Duhalde quien logró encauzar la situación económica de la mano de su ministro de Economía Roberto Lavagna, quien continuó su gestión durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner hasta que surgieron desavenencias entre ellos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En el año en que se conmemora el bicentenario de la Revolución de Mayo es oportuno realizar algunas reflexiones. Como se ha podido apreciar, tanto durante los años que se extendieron desde 1810 hasta la organización constitucional de 1853, como durante los años posteriores, la historia argentina ha mostrado una serie de antinomias que obstaculizaron su normal desarrollo. Cuando el sistema de fraude, impuesto por la oligarquía nacional que implantó un incipiente uso del clientelismo e hizo uso de la violencia política, fue quebrado y en 1916 asumió una nueva fuerza, la UCR, se pudo incluir a los sectores medios de la sociedad profundizando el sistema clientelar pero, en el contexto de la crisis mundial, no pudo confrontar con los esquemas corporativos. De ese modo, en 1930 el gobierno cayó y, encabezado por el sector militar, el sistema conservador se adueñó del poder imponiendo nuevamente el fraude bajo la ficción de una democracia. La Argentina pujante que ocupó los primeros diez lugares en el concierto internacional inició su desenfadada caída en un proceso de gobiernos cívico-militares alternados con cortos períodos de gobiernos democráticos, los cuales, en general, salvo el peronismo, tampoco pudieron hacer frente a la oposición sindical.

Durante ese período, en la medida de sus posibilidades, los gobiernos del general Perón echaron nuevamente mano al clientelismo y se reemplazó la antinomia “conservador – radical” por la de “peronista – antiperonista”. Tanto el

gobierno como la oposición no dudaron en apelar, cada vez con mayor frecuencia, a la violencia política. Las secuelas de esa contradicción aún perduran y han sido revitalizadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Del mismo modo, recurrieron nuevamente al clientelismo para la conservación del poder. Como expresara oportunamente el político italiano Enrico Berlinguer (1922–1984) “los partidos actuales son, sobre todo, máquinas de poder y de clientelismo”, lo que, en definitiva, frena el desarrollo de cualquier nación, pues sus políticos se obsesionan por ejercer el poder y no por construir las bases de crecimiento y desarrollo de la sociedad y del conjunto de la nación.

La vuelta de la democracia en 1983 comenzó a apartar a las Fuerzas Armadas del protagonismo que tenían tutelando a los gobiernos civiles. El presidente Alfonsín llevó a cabo los juicios contra los militares por violación de los derechos humanos pero poniendo un cierto límite con las leyes de “obediencia debida” y “punto final” que procuraban no acrecentar las heridas en la sociedad. Con respecto al gobierno del presidente Menem, indultó a los militares pero mediante su política de alineamiento con los Estados Unidos, los miembros de las Fuerzas Armadas participaron en las misiones de las Naciones Unidas y de la Primera Guerra del Golfo pero se procedió al desarme de las mismas, en la medida que no adquirió armamento y se desarmó el sistema de Fabricaciones Militares y se entregó el Área Material Córdoba –fábrica de aviones militares – a la empresa estadounidense Lockheed, la que no procedió a la producción de aeronaves y prácticamente la desactivó. Con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner se emprendió una seria ofensiva contra los militares de la época de la dictadura sometiéndolos nuevamente a juicio pero también se acrecentó la política de desarme.

De este modo, en los veintisiete años desde que se recuperó la democracia, los gobiernos civiles emprendieron una política de achicamiento del Estado que no sólo no cumple con sus mínimas obligaciones hacia sus ciudadanos sino que, en términos de defensa, ha dejado a una de las naciones más extensas del mundo en una situación de indefensión. En este sentido, se ha obrado de una forma desacertada.

La conmemoración del bicentenario requiere de una reflexión acerca de las cosas que los gobiernos han hecho bien –sin miramientos con respecto a la ideología– y refundar la república a partir de una nueva pauta cultural que involucre a todos los sectores de la sociedad con miras a obtener los mejores resultados de una Nación con un gran potencial.

BIBLIOGRAFÍA

- Botana Natalio, *El orden conservador*, Hyspamérica, Buenos Aires 1986.
Ferns Harry S., *La Argentina*, Sudamericana, Buenos Aires 1973.

- Colombo Guillermo Eduardo, *Carlos Guerrero: Burgués terrateniente o clase dominante, su caso*, Jornadas Interescuelas – Departamentos de Historia, La Pampa 1997.
- Guerrero Carlos, *Publicaciones prácticas de ganadería, agricultura e higiene agropecuaria*, Martino y Gutiérrez, Buenos Aires 1915.
- Halperín Donghi Tulio, *De la revolución de independencia a la confederación rosista*, Paidós, Buenos Aires 1980.
- López Roberto Rubén y Colombo Guillermo Eduardo, *Historia de los partidos políticos en la Argentina desde 1940 al 2004*, “Anales de la Facultad de Ciencias Empresariales”, tomo I, núm. 2, Universidad Abierta Interamericana (UAI), Buenos Aires 2006.
- Luna Félix, *Irigoyen*, Hyspamérica, Buenos Aires 1986.
- Martínez de Hoz José A., *Un balance de los últimos 15 años*, “Dirigencia”, noviembre de 1995.
- Massot Vicente, *Revolución: Mayo 1810*, El Ateneo, Buenos Aires 2010.
- Rock David, *El radicalismo argentino, 1890–1930*, Amorrortu, Buenos Aires 1977.
- Rock David, *La construcción del Estado y los movimientos políticos en la Argentina 1860–1916*, Prometeo, Buenos Aires 2006.
- Silvestre Jorge y Rodríguez Rossi Víctor, *La Masonería y el bicentenario*, Lajouane, Buenos Aires 2010.
- Sommi Luis V., *La revolución del 90*, Pueblos de América, Buenos Aires 1957.

